

Modelos de acción urbanos y movimiento campesino

Miguel Bahamondes P.

Grupo de Investigaciones Agrarias, GIA

No es propósito de la presente ponencia efectuar una exposición pormenorizada del estado actual de la organización/movimiento campesino; ella más bien pretende llamar la atención sobre la continuidad que se observa en la forma como se ha concebido la organización campesina y su participación en la sociedad nacional, desde el momento de su gestación hasta el presente.

Los estudios de lo que ha sido y es la organización campesina, y las movilizaciones que ella ha emprendido, arrojan como constante su alta dependencia de organizaciones y movimientos de inspiración urbana. En la mayoría de los casos, la necesidad de ampliar la base de apoyo para proyectos sociales que ponían el acento en el desarrollo industrial-urbano del país, llevó a partidos y alianzas de partidos a extender sus vínculos hacia sectores campesinos. Buscaban, por una parte, sustraer al poder del terrateniente un gran contingente de población, para posteriormente, una vez conquistado el Estado con el favor de su voto, poner a los trabajadores del campo al servicio del modelo que se intentaba desarrollar: la producción campesina como la principal fuente proveedora de bienes agrícolas en el contexto de la estrategia de sustitución de importaciones.

Lo anterior ha llevado a que la forma asumida por la organización campesina, tanto en sus modos de operar como en sus demandas, constituya –la mayoría de las veces– un remedo de las formas que se han dado las organizaciones de trabajadores en los centros urbanos y mineros.

Sin duda estas características, particularmente en lo que dice relación con la dependencia urbana, más la debilidad de la propia organización campesina, en reiteradas oportunidades llevaron a que, en su lucha por conquistar mejoras en las condiciones de vida de los sectores obreros y medios, sus representantes “sacrificaran” en el juego político las demandas que pudieron irse perfilando en el mundo rural. Durante mucho tiempo, los campesinos se vieron sometidos a una doble tensión: por una parte, se los estimulaba, una y otra vez, directa o indirectamente, a plantear sus reivindicaciones y a vincularse a otros sectores de trabajadores para el logro de sus objetivos; y, por otra, en los hechos, una y otra vez se les negaba aquello que sus compañeros de ruta iban alcanzando progresivamente.

Como señaláramos más arriba, la concepción de cómo los trabajadores debían proceder en término organizativos provenía de fuera del mundo rural; fue llevada, en un primer momento, por

miembros de familias campesinas que habían emigrado hacia los centros mineros del norte del país. Allí habían tenido sus primeras experiencias con el sindicalismo, las mismas que intentaron reproducir al regresar a sus lugares de origen. Posteriormente, los partidos políticos, a través de una vinculación orgánica con aquellos líderes locales, o mediante el envío de "representantes" al campo, hicieron del sindicato la herramienta privilegiada del accionar de los trabajadores rurales y campesinos. Este énfasis en el sindicato como instrumento para la organización marcó profundamente a los sectores campesinos: los alineó, al menos a aquellos identificados como estratégicos por los proyectos en gestación, en torno a la reivindicación por el derecho al reconocimiento legal de la organización.

Más allá de la importancia que pudo haber tenido esta reivindicación, es preciso también preguntarse por los alcances negativos de la misma. Queda la impresión de que el sindicato se transformó más en un fin que en uno de los instrumentos —entre otros— que debía emplearse para avanzar en la conquista de derechos y mejoras en las condiciones de vida de los campesinos. Generalmente se argumenta, frente a este énfasis, en un supuesto apego legalista de los campesinos. Esto es, que sólo sería factible pensar en la movilización de los sectores campesinos si su organización se da dentro del ámbito jurídico que el Estado ha definido como válido. Tal argumentación, no obstante, olvida que cuando situaciones de contexto han puesto en peligro su existencia, los campesinos han reaccionado (con mayor o menor empleo de la fuerza) impulsando movimientos que superan con creces la legalidad existente. Muestra clara de lo anterior son las acciones de resistencia emprendidas por los comuneros de la Cuarta Región ante los intentos de los dueños de haciendas aledañas por usurpar sus tierras (corridas de cerco); o los permanentes conflictos que sostuvieron los pequeños proletariados de la zona central con los latifundistas por el control o acceso al agua para riego, entre otros.

Si esto es así, entonces cabe preguntarse por qué el énfasis en la estrategia sindical. La respuesta necesariamente supera los límites del espacio rural

y nos vuelve a situar en el plano de la estrategia general diseñada por los partidos políticos, con base popular, para alcanzar sus objetivos. A. Saavedra da cuenta de lo anterior sosteniendo que "las concepciones de transformación de la sociedad en términos evolutivos, a través de la obtención de mayorías en el Parlamento y en el gobierno, a través del Estado burgués y la dictación de nuevas leyes, cobra fuerza tanto en la búsqueda de una mayor participación electoral como en la importancia desmesurada que le atribuye a la organización sindical" (Saavedra 1975:79).

Obviamente, el énfasis en la acción sindical tiene diversas implicancias. De una parte, lleva implícita la idea de que el movimiento debe darse por los cauces de la legalidad; se elude de esta forma un problema central: el disciplinamiento de la fuerza de trabajo que constantemente ejecuta el capital en función del proceso de acumulación que debe llevar adelante. La legalidad o ilegalidad de una demanda, y de la acción que se debe emprender para su logro, encuentra su marco dentro de ese espacio y, por tanto, se ve constreñida a él. De esta forma, acciones que se sitúen al margen de lo "estipulado" serán rápidamente estigmatizadas o aplastadas.

De otra parte, el sindicalismo define claramente una relación entre dos partes, una de las cuales, en virtud de la entrega de su fuerza de trabajo a la otra, arreglos contractuales de por medio, percibe un salario. El poner el acento en esta relación, y hacer del sindicato su expresión organizativa, supuso dejar a un vasto contingente de población, tanto de sectores urbanos como rurales, sin expresión "legal" de sus demandas. En el caso campesino, la mirada se dirigió hacia el segmento "inquilinos", o sea hacia el sector que estaba vinculado permanentemente al fundo, y que una vez implementada la Reforma Agraria pasó a constituir el sector reformado. Pero éstos de ninguna forma constituían el grueso de la población trabajadora del agro. Algunos estudios han estimado en 190.000 pequeños campesinos, 90.000 trabajadores agrarios, 150.000 trabajadores agrarios ocasionales y estacionarios, y 170.000 miembros de familia que colaboran en el trabajo, el número de personas o sectores que no fueron consideradas en el pro-

grama de la Unidad Popular (G. Simonis, citado por F. Mires 1988:355).

El golpe militar de 1973, y todo el período que duró la dictadura, significaron una redefinición de la relación de las organizaciones campesinas con el Estado. Ella se situó en "una nueva forma de acumulación cuyas características centrales otorgan su significado a la política agraria y consecuentemente al tratamiento de proletarios y campesinos" (Bruna 1985:145). Como es por todos conocido, la piedra angular de este planteamiento es que el conjunto de los procesos productivos se deberá adecuar al sistema de precios establecidos en el mercado mundial, debiendo, por tanto, orientarse la inversión de capitales hacia aquellas actividades donde se obtengan las mejores tasas de ganancia.

La obtención de ganancias, favorecidas en algunos casos por las denominadas "ventajas comparativas" (rentas diferenciales), recayó fundamentalmente en el pago a la fuerza de trabajo; surgió nuevamente el tema del disciplinamiento de los trabajadores, pero ahora en un contexto donde, al romperse mediante la fuerza un tipo de relación que se había venido estructurando desde los años veinte en el agro, se subordinó absolutamente la fuerza de trabajo a los intereses del capital. Para ello se combinó la acción represiva directa con la acción legal (nuevo Código del Trabajo), a través de numerosas trabas a la organización y reivindicación laboral.

Durante este período, más allá de los intentos hechos por las organizaciones campesinas tradicionales, con el apoyo de organismos de iglesia y de ONGs, entre otras, no se logró contrarrestar el impacto de las políticas gubernamentales, disminuyendo considerablemente el número de campesinos organizados en sindicatos o cooperativas.

El nuevo escenario agrario se redefinió a partir de la superación definitiva del latifundio; aparecieron como actores un sector de empresas medianas y grandes de tipo capitalista;¹ otro sector de

pequeños productores, en diversos grados de diferenciación, que tuvo su origen en el proceso de reforma agraria; un tercer sector conformado por pequeños productores tradicionales, y los minifundistas.

Pero los cambios operados en la relación laboral al interior de la empresa capitalista (disminución del número de trabajadores permanentes y su relocalización fuera de los límites del predio), significaron poner en primer plano un actor históricamente presente en el agro, aunque constantemente olvidado: los trabajadores temporeros. Su composición, en ese momento, aparecía modificada por la incorporación de población oriunda de centros urbanos, la que se sumó a la proveniente del sector de pequeños propietarios tradicionales y minifundistas, principalmente.²

¿Cuál es el escenario en el que actualmente se mueve el campesino y sus organizaciones? ¿han sido superadas las estrategias que ponen el acento en el hacer aquello que es posible en la medida que se adecua a los límites impuestos externamente? ¿se ha superado la concepción de la división entre acciones legales e ilegales en el proceder de los campesinos y otros trabajadores del agro, en sus reivindicaciones por mejoras laborales o productivas? La respuesta a estas interrogantes es negativa.³ Hoy, bajo el imperio de las variables

capitalista que el propio latifundista ha ejercido sobre la fuerza de trabajo incorporada a la hacienda" (Saavedra 1975:31; subrayado del autor). Es este tipo de capitalismo el que se superado al interior de la gran propiedad, pero la sobreexplotación es un mecanismo que aún prevalece; es el caso de los trabajadores temporeros.

2. En un estudio realizado por Gómez & Echeñique (1986), donde se caracteriza a los trabajadores temporeros, se estableció que la composición de la fuerza de trabajo temporera según el sector de residencia habitual era la siguiente:

a) Agricultura campesina (pequeña propiedad y minifundios, área de reforma agraria y comunidades indígenas)	40,4%
b) Agricultura empresarial	7,0%
c) Rural urbanizado	39,7%
d) Urbano	12,9%

3. A partir de 1988 se observa un importante incremento en la sindicalización nacional. El sector agrícola no ha estado al margen de este crecimiento. Al año 1987, tan sólo 3,9 por ciento de las personas que se desempeñaban en la rama 1

macroeconómicas y su equilibrio, el disciplinamiento de la fuerza de trabajo resulta fundamental para mantener la "competitividad" del sector. Una muestra clara de ello es, por ejemplo, la imposibilidad de los trabajadores frutícolas de ir a la huelga en periodos de cosecha. O que, para negociar colectivamente, los sindicatos que no son de empresas deben contar con el consentimiento de los patrones.

Aunque el Estado ya no intervenga directamente en los conflictos laborales, la presión que los partidos políticos ejercen sobre las direcciones campesinas -y, en general, sobre las organizaciones de trabajadores- tiende a reproducir el tradicional esquema de funcionalización de las organizaciones populares a intereses que se definen fuera de su ámbito y que obviamente no le reportan mayores beneficios. De otra forma no se puede entender la falta de rechazo abierto a un modelo marcadamente excluyente, altamente regresivo en la distribución del ingreso y cuyas "posibilidades" de reorientar sus beneficios hacia los sectores populares está imposibilitada por su propia reproducción. Es más, cualquier intento por parte de los trabajadores de alcanzar beneficios que se sitúen por sobre lo que el capital ha definido, los transforma en poco menos que enemigos de la patria, en sujetos que sólo buscan el beneficio particular en detrimento de otros sectores de trabajadores o, como es habitual escuchar, en sujetos que ponen en peligro el proceso de transición.

Se ha llegado así al extremo de la visión ideológica de la relación trabajadores-empresarios: se parte del supuesto de que existen intereses complementarios (no contradictorios) entre ambas partes, y que sólo es preciso concordar una agenda que regule la relación entre ellas.

En este escenario, los campesinos y trabajadores del agro deben avanzar en la formulación de un proyecto que les permita sustraerse a los marcos impuestos por los sectores dominantes; en esta tarea, además, deben ser capaces de situarse, en una política de alianzas, frente a trabajadores de otras ramas y sectores populares en general, en un plano de igualdad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Bruna, Susana
1985 "Chile: las luchas campesinas en el siglo XX". En: Pablo González Casanova, coord. *Historia política de los campesinos latinoamericanos*. Vol. 4. México: Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM/Ed. Siglo XXI.
- C.N.C.
s/f Situación actual de la organización campesina, al 30 de junio de 1991.
- Frías, Patricio & Jaime Ruiz-Tagle
1992 *Situación y dinámica del sindicalismo chileno en el contexto económico y sociopolítico*. Santiago: PET.
- Gómez, Sergio & Jorge Echeñique
1986 "Trabajadores temporeros de la agricultura moderna del Chile central". Documento de Trabajo Flasco 324. Santiago.
- Mires, Fernando
1988 *La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina*. México: Ed. Siglo XXI.
- Saavedra, Alejandro
1975 *Capitalismo y lucha de clases en el campo*. Chile 1970-72. Madrid: Comunicación Serie B, Alberto Corazón Editor.

se encontraban afiliadas a sindicatos; para 1991 el porcentaje alcanzaba a 8,2 (el promedio nacional era de 15,4 por ciento). Según antecedentes manejados por la C.N.C. (1991), el 43,4 por ciento de la fuerza de trabajo sindicalizada en el agro se localizaba en la Región Metropolitana; el resto se distribuía de la siguiente forma: 0,4 por ciento Primera Región, 7,0 por ciento Cuarta Región, 7,2 por ciento Quinta Región, 13,0 por ciento Sexta Región, 10,8 por ciento Séptima Región, 2,7 por ciento Octava Región, 5,0 por ciento Novena Región y 10,4 por ciento en la Décima Región.